



JUZGADO CATORCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN
Medellín, veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021)

PROCESO	Acción de Tutela
ACCIONANTE	Marlon Fabian Higuita Rodríguez C.C. 98.778.715
ACCIONADO	SECRETARIA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN
VINCULADO	ALCALDÍA DE MEDELLÍN
PROCEDENCIA	Reparto
RADICADO	Nº 05001 40 03 014 2021 00630 00
INSTANCIA	Primera
TEMAS Y SUBTEMAS	Petición
DECISIÓN	Niega hecho superado
SENTENCIA	146

Procede el Despacho a resolver la solicitud de tutela promovida por **Marlon Fabian Higuita Rodríguez C.C. 98.778.715** en contra de **SECRETARIA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN**, encaminada a proteger su derecho fundamental de Petición.

I. ANTECEDENTES

1.1. Supuestos fácticos y pretensiones. - En síntesis, manifestó el accionante que mediante derecho de petición al cual se le asignó el radicado PQR Nº 202110121100.

Señaló que la entidad accionada dio respuesta al mismo de manera inconclusa, toda vez que solicitó a la entidad accionada la prescripción del comparendo cargado a su nombre con No. **05001000000002317118** con fecha 26/02/2013, el accionante no se encuentra satisfecho con la respuesta brindada por la entidad accionada. Razón por la cual interponer acción de tutela en busca de que se le restablezcan los derechos que considera se le están vulnerando.

En definitiva, solicita que el Juez Constitucional le restablezca sus derechos conculcados y le ordene a la entidad administrativa accionada 'Se declare la exoneración de los comparendos por cumplirse el fenómeno de prescripción, Se

ordene a la secretaría movilidad de Medellín bajar de las plataformas SIMIT y foto multas de la secretaria de movilidad de Medellín ”

1.2.- Trámite. - Admitida la solicitud de tutela el 16 de junio del año que avanza, se vinculó a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN ordenándose la notificación a la accionada y a la vinculada; recibíéndose respuesta por parte de la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN, quien manifestó que; Referente al derecho de petición 202110121100, se le dio respuesta con radicado de salida 2021130247513, y se notificó al correo electrónico aportado por el peticionario.

En la respuesta aportada se resolvió DECLARAR PROCEDENTE la prescripción de la Acción Ejecutiva del proceso que se adelanta contra el (la) señor HIGUITA RODRIGUEZ MARLON FABIAN identificado (a) con Cédula de Ciudadanía número98778715; en razón del comparendo N° **05001000000002317118** DEL 26 DE FEBRERO DE 2013 de conformidad con el artículo 818 del Estatuto Tributario.

El señor RAFAEL ANTONIO ACENDRA ARGUELLES, en calidad de Líder de la unidad de cobro coactivo, solicita DENEGAR POR IMPROCEDENTE la presente Acción de Tutela, toda vez que, según lo narrado considera la Secretaría que la demanda de tutela que motiva el presente escrito carece de objeto, en atención a que se dio solución a la petición.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia. - Esta agencia judicial es competente para conocer y fallar de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 86 de la Constitución Nacional, art. 37 del Decreto 2591 de 1991 y el inciso 2°, numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.

2.2. Problema jurídico. - Corresponde a este Despacho Judicial determinar si en efecto la entidad administrativa accionada del orden municipal, vulneró los derechos fundamentales invocados en esta acción por **Marlon Fabian Higuita Rodríguez** en el trámite contravencional adelantado en virtud de la orden de comparendo nacional No **05001000000002317118** con fecha 26/02/2013.

2.3. Marco Normativo aplicable. - Constitución Política: Arts. 1, 2, 11, 48, 49, 86, 228, 230. Decreto 2591 de 1991: Arts. 1, 5, 10, 23, 27, 29, 42. Decreto 306 de 1992: Arts. 4 y 6. Decreto 1382 de 2000.

2.4. DE LA ACCIÓN DE TUTELA - La acción de tutela conforme al artículo 86 de la Carta Política de 1991, es un mecanismo de protección de carácter residual y subsidiario que puede ser utilizado ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, cuando no exista otro medio idóneo para la protección de los derechos invocados, o cuando existiendo otro medio de defensa judicial, se requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991).

La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite reconocer la validez de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como mecanismos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. De manera que, al existir estos mecanismos, los ciudadanos se encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que quien alega la afectación de sus derechos debe agotar los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto, exigencia ésta que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrita, que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes.

2.5. DERECHO DE PETICIÓN. - En el marco de una democracia participativa, el derecho de petición cumple un papel relevante como factor esencial del estado social de derecho. Es por el ello que la propia Constitución Política lo consagra expresamente en su artículo 23 y le reconoce el carácter de derecho fundamental. Al respecto, la citada norma dispone que "*toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución*".

Ahora, normativamente el derecho de petición se encuentra regulado en la Ley 1755 de 2015, que modificó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo, estableciendo como término general para resolver las distintas modalidades de peticiones, los **quince (15) días** siguientes a la recepción, señalando plazos diferentes cuando se trata de peticiones de documentos y de información (diez (10) días) y las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo (treinta (30) días).

La Corte Constitucional en la sentencia de T-332 de 2015 se ha referido en distintas oportunidades a la importancia de esta garantía fundamental, cuya efectividad, según se ha reconocido, *"resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio de la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas (artículo 2o. Constitución Política)"*¹.

A partir de esta garantía la jurisprudencia ha fijado una serie de reglas y de parámetros relacionados con el alcance, núcleo esencial y contenido de este derecho. Al respecto ha precisado lo siguiente:

"a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

*c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado **3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.***

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

¹ Sentencia T-012 de 1992.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver (norma que fue derogada por la ley 1255 de 2015). De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.²

2.6.- EL CONCEPTO DE HECHO SUPERADO. - La naturaleza de la acción de tutela estriba en garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales. De modo que, cuando la amenaza a los derechos fundamentales de quien invoca

² Ver Sentencia T-377 de 2000, T-173 de 2013, T-211-14, entre otras.

su protección cesa, ya sea porque la situación que propiciaba dicha amenaza desapareció o fue superada, esta Corporación ha considerado que la acción de tutela pierde su razón de ser como mecanismo de protección judicial, en la medida en que cualquier decisión que el juez de tutela pueda adoptar frente al caso concreto carecerá de fundamento fáctico.

Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte en la T-011 de 2016 ha indicado que *"la acción de tutela, en principio, "pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo"*³. En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz⁴.

*En efecto, si lo que el amparo constitucional busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y "previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales"*⁵. En otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela."

2.7. El caso en estudio y solución al problema jurídico planteado. En el caso sub júdice, la parte accionante pretende que la multa N°. **05001000000002317118** con fecha 26/02/2013, que le impusieron y sobre el cual solicita se le aplique el fenómeno de la prescripción.

Así, si el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada, que debe darse en un tiempo razonable y que debe ser comunicada al peticionario; en este caso, por **Marlon Fabian Higuita Rodríguez** mediante derecho de petición dirigido a la **SECRETARIA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN**, en el cual solicitó la prescripción de lo comparendo N° **05001000000002317118**, el cual si bien por respuesta del 31 de mayo del 2021, se le dio contestación a su petición sin que fuera posible acceder a las pretensiones que solicitaba.

Por su parte, la entidad accionada manifestó que una vez estudiadas las evidencias procesales y analizados los postulados jurídicos, se determinó los fundamentos de hecho y de derecho en el proceso de la referencia, y se avizora que efectivamente PROCEDE LA PRESCRIPCIÓN de la acción de cobro, consagrada el artículo 818 del Estatuto Tributario Nacional, por cuanto ha transcurrido un término superior a los tres (3) años contados a partir de la notificación del mandamiento de pago, lo cual implica que el acto pierda su fuerza ejecutoria y deje de ser exigible, todo ello se acredita en los PDF 08 y 10.

De allí que nos encontremos ante una carencia de objeto por hecho superado, como se logra evidenciar en el pdf 09, ya que la **SECRETARIA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN** procedió a emitir la RESOLUCIÓN N° 202150054746 del 18 DE JUNIO DE 2021 QUE RESUELVE SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN, por medio de la cual se decidió lo siguiente:

"(...) ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la prescripción de la acción ejecutiva, del proceso que se adelanta en contra del (la) señor (a) HIGUITARODRIGUEZ MARLON FABIAN identificado (a) con Cédula de Ciudadanía número 98778715; en razón del comparendo N° 05001000000002317118 DEL 26 DE FEBRERO DE 2013 de conformidad con el artículo 818 del Estatuto Tributario. Prescripción de la acción de cobro, tal como se expone en la parte motiva de este proveído; y en consecuencia, ARTICULO SEGUNDO: TERMINAR el proceso especial de cobro coactivo que se adelanta en contra del señor (a) HIGUITA RODRIGUEZ MARLON FABIAN identificado (a) con Cédula de Ciudadanía N°98778715, en razón del comparendo N°05001000000002317118 del 26 DE FEBRERO DE 2013 con aviso. ARTICULO TERCERO: ENVIAR las presentes actuaciones al operador UNE -TELCO para que anexe las mismas al expediente correspondiente al comparendo N° 05001000000002317118, del 26 DE FEBRERO DE 2013, y hagan parte integral del mismo. ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión al ciudadano HIGUITA RODRIGUEZ MARLON FABIAN, identificado con la cédula de ciudadanía 98778715 del contenido de la presente resolución. ARTICULO QUINTO: ADVERTIR que contra la presente Resolución proceden los recursos de Ley. ARTICULO SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes (...)"

Ahora bien, cuando quiera que la respuesta no sea del agrado del accionante por no serle favorable, tendrá que debatir el sentido de la misma, pero ello no quiere decir que haya vulneración del derecho de petición, pues como indicó la Corte Constitucional en Sentencia S-T. 206 de 2018 lo siguiente:

“El segundo elemento implica que las autoridades públicas y los particulares, en los casos definidos por la ley, tienen el deber de resolver de fondo las peticiones interpuestas, es decir que les es exigible una respuesta que aborde de manera clara, precisa y congruente cada una de ellas; en otras palabras, implica resolver materialmente la petición. La jurisprudencia ha indicado que una respuesta de fondo deber ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex Novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”. **En esa dirección, este Tribunal ha sostenido “que se debe dar resolución integral de la solicitud, de manera que se atienda lo pedido, sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva”** (Negrillas propias).

En mérito de lo dicho, **EL JUZGADO CATORCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato constitucional,

I. FALLA:

PRIMERO: DENEGAR la presente acción de tutela **POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO** promovido por **Marlon Fabian Higuita Rodríguez C.C. 98.778.715** en contra de la **SECRETARIA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN**, por los motivos expuestos.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a los interesados por el medio más expedito y eficaz, conforme a lo normado en el artículo 30 del Decreto 2591/91.

TERCERO. Esta decisión puede ser impugnada dentro de los tres (03) días siguientes a su notificación. Una vez ejecutoriada y de no ser recurrida, remítase el expediente ante la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE

JHON FREDY CARDONA ACEVEDO
JUEZ

NMB

Firmado Por:

JHON FREDY CARDONA ACEVEDO
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9e63ae789a957f827f5b0aef8af60841975e5f043eee719ea64074e2b521fa6c**
Documento generado en 24/06/2021 09:54:31 AM